

AMPARO

Promovido ante el juzgado de Distrito de Sinaloa por J. Gallick y hermano, contra el C. Administrador de la Aduana Marítima de Mazatlan, que les exige por medio de la facultad economico-coactiva, el pago de derechos de importacion causados por efectos que trajo el vapor americano «Sacramento.»

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

En el juicio de amparo solicitado por los Señores F. Heymann, emití mi parecer en los términos siguientes:—Los Sres. F. Heymann solicitan de vd. amparo contra los procedimientos del C. Administrador de la Aduana Marítima, que obrando en virtud de las órdenes del Supremo Gobierno, trata de exigir de dichos Sres. el pago de \$8,226,68 centavos que es la tercera parte de los derechos que causaron las mercancías importadas por el bergantín "Amanda," y que segun la manifestacion que los mismos Sres. hicieron al C. general S. Rocha, pagaron á los pronunciados que ocupaban esta plaza. La queja de amparo se funda C. Juez, en asentar, que el C. Administrador de la Aduana Marítima, no es autoridad competente para proceder contra dicha casa sujeta su resistencia en pagar de plano la 3ª parte de derechos á que por equidad el Supremo Gobierno tuvo á bien reducir la responsabilidad íntegra que les resultaba, por haber individualmente pagado á autoridades que no eran las legítimas y esto cuando estando precisamente clausurado el puerto, en virtud de disposiciones legislativas anteriores; despues del precedente de Tampico nadie ignoraba que se hacia efectivo el doble pago de derechos, siempre que estos se pagaran á la revolucion. Es cierto que de parte de los Sres F. Heymann mi-

litán diversas razones que sin duda fueron atendibles, pues el mismo general Rocha que estuvo inexorable respecto de otras casas importadoras, tuvo á bien eximir á aquello Sres. de dar pagarés, y solo guardó su responsabilidad, pendiente de la Suprema resolucion del Gobierno. Es cierto tambien, que no firmaron fianza alguna segun informa el Administrador de la Aduana; pero tambien lo es que el Gobierno al resolver sobre los pagarés hechos en Mazatlan, y obrando como debia obrar por medio de una medida general, y sin duda la mas equitativa, se resolvió que todos sin escepcion deberian pagar solo la 3ª parte. Pues bien: aquí entra perfectamente la facultad coactiva de parte del Administrador de la Aduana que tenia que hacer efectivo un pago decretado en virtud de disposiciones legislativas anteriores al hecho, y que el Gobierno anterior en virtud de ellas solo habia por equidad hecho mas benigno; debia pues proceder á requerir de pago, y en caso contrario asegurar bienes equivalentes á cubrir los adeudos fiscales. Que los procedimientos de dicho Administrador no son conformes con las leyes que reglamentan la facultad coactiva, sería cierto y podría producirse como prueba en un juicio contencioso declarativo; pero que el Administrador tiene la facultad y el deber de proceder por los trámites expeditivos y sumarios al aseguramiento de intereses fiscales y solo con el fin de que estos no se hagan ilusorios, dejando á la hacienda pública pelcar despojada, es lo que creo que es insostenible y de ninguna manera importa la violacion del art. 16 de la Constitucion general de la República.

Por lo expuesto, es que dejando á salvo en todo tiempo á los Sres. F. Heymann y Compañía el ejercicio de sus acciones ante los jueces y por los trámites ordinarios, y considerando al Administrador de la Aduana marítima como autoridad competente para el aseguramiento de los derechos fiscales, pido que se declare: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los Sres.

F. Haymann y Compañía. Este juicio de los Sres. J. Gallick y Hermano, se encuentra en el mismo caso; pero además hay una circunstancia especial respecto de estos Señores, que los quita enteramente cualquier derecho con que la ley pudiera protegerlos. Su liquidación citada, hecha y aceptada con mucha anterioridad á la venida del Sr. Rocha, su sola renuencia en pagar, es decir, la demora que castiga la ley con el doble pago en casos comunes, tuvo lugar respecto de ellos y así se puede justificar. ¿Y son estos como dicen, los que obraron por el terror ocasionado por los fusilamientos sin formación de causa? Otras causas sin duda que pueden apelar á promover excepciones tal vez legítimas en un juicio contencioso: los Sres. Gallick Hermano, absolutamente no se encuentran en este caso. Si de otros se puede presumir que pagaron á los pronunciados porque de esta manera tenían una notable y notoria ganancia, como lo hicieron, de los Sres. Gallick Hermano se puede probar y es evidente, que si no pagaron en tiempo á los empleados, fué porque esperaban libertarse de su pago con los pronunciados.

Por lo expuesto y para mejor fundar su dictamen sobre que no debe amparar á los Sres. Gallick Hermano, por los procedimientos que contra ellos ejerce la Aduana marítima, pide al Juzgado se sirva recibir este negocio á prueba por un corto término, con el fin de justificar que la morosidad en el pago no estuvo de parte de la Aduana sino de parte de los interesados.—Mazatlan, Enero 22 de 1873.—*L. Gaona.*

Es copia que certifico. México, Mayo 27 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

Sentencia del O. Juez del Distrito.

Mazatlan, Febrero 24 de 1873.—Visto el presente juicio de amparo promovido por
TOMO IV.—PARTE II.

J. Gallick y Hermano, contra la providencia que el C. Administrador de la Aduana marítima dictó en uso de la facultad económico-coactiva, que la ley de 20 de Enero de 1837 concede á los empleados para exigir por medio de aquella, el pago de seiscientos cinco pesos veintitres centavos, tercera parte de derechos de importación de los efectos que á la consignación del quejoso, trajo el vapor americano "Sacramento," alegando, que con tal providencia se viola la garantía que otorga el artículo 16 de la Constitución general, por lo que se apoya la queja en la fracción 1ª artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869. Visto también lo pedido sobre suspensión de tal providencia; lo que se decretó de conformidad con la segunda parte del artículo 5º de la citada ley de 1869, por hallarse el caso comprendido en dicha fracción. Visto por último lo alegado por el C. Fiscal; las pruebas de Gallick; el alegato que este hizo con presencia de aquellas y los documentos presentados por el mismo Fiscal, para que se tuviesen presentes al tiempo de fallarse el negocio, con todo lo mas que ver convino.

Considerando: que aunque la importación de los efectos que causaron los derechos que se cobran, se hizo en tiempo en que el interesado debió satisfacer concluida la liquidación de la correspondiente hoja, y por cuya circunstancia puede considerarse al referido Gallick, como deudor de un derecho líquido y reconocido, y por lo mismo, obligado aquel á pagarlo sin contradicción alguna; pero como esta obligación no se exigió, sino hasta la víspera de que estallara el movimiento revolucionario que hizo suspender las funciones de los empleados legítimos, según lo declaran Barraza y Andrade, cuyas declaraciones están en contradicción con la del cajero de la Aduana; pero siendo en derecho mas atendibles las primeras que la última, tanto por su número, como porque al cajero debe estimárselo hasta cierto punto por impedido, para que su dicho merezca toda fé en este negocio; queda

justificado que á Gallick no se le cobró sino hasta que se concluyó la liquidación de su hoja, y como esto se hizo ya en la víspera del día que tuvo lugar el pronunciamiento de 17 de Noviembre de 1871, en horas en que estaba cerrada la oficina, la excepción que opone, debe atenderse para no ser considerado como moroso en el pago, y mas si se atiende á lo que declara Andrade sobre las consideraciones que dice ha guardado la Aduana á los comerciantes de poco capital.

Considerando tambien: que por las pruebas presentadas por el repetido Gallick, se vé, que éste fue exigido por el pago de tales derechos, con la intervencion de una fuerza armada que no pudo resistir, y por cuyo motivo dice, que esta excepcion errec le favorece para no considerarse deudor de ellos, y menos con facultad á la Aduana para exigirlos por medio de la facultad coactiva, por que en virtud de la excepcion de fuerza que alega, ya deben considerarse forzosas las actuaciones judiciales, y por-consiguiente el negocio contencioso, en el que segun el artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1837, no cabe aquella facultad.

Considerando tambien: que por la variacion de tiempo y circunstancias que hubo cuando fué estrechado por los revoltosos Gallick, y la de haber sido la misma fuerza federal que apoyaba á los empleados legitimos, la que inició tal movimiento revolucionario, ofrecen un motivo fundado de duda, sobre si el quejoso está ó no obligado al segundo pago de los derechos, cuyo caso se halla excluido de la repetida facultad coactiva, segun el artículo 2º de la misma ley de 1837.

Considerando igualmente: que de autos consta, que el quejoso exhibió la cantidad que reclama la Aduana, mediante la fuerza que intervino para este pago, por cuya razon se suscitó la cuestion, si es ó no responsable de haberlo verificado, ó tal responsabilidad debe recaer en los empleados, por no haber cobrado con mas oportunidad los

derechos que hoy exige, y por no haber ocultado la liquidación de Gallick, cuya cuestion hace por consiguiente, que el derecho del fisco no sea claro ó indudable, y por lo mismo deja sin lugar los procedimientos de la facultad coactiva.

Considerando por último: que en el hecho de resolver el Gobierno, despues que fué impuesto del modo y términos que á Gallick se le obligó por los revolucionarios al pago de la cantidad que ellos se tomaron, que solo se exigiese á éste una tercera parte del total de los derechos que causaran sus mercancías, ya hay razon para calificar este adeudo de ilíquido, dudoso y cuestionable, supuesto que no se hace de entera conformidad con lo que las leyes han asignado, sino con sujecion á una resolucion del Gobierno, que podrá ser ó no atendible en su totalidad por los tribunales, á la vez que en buenas palabras puede decirse, que la rebaja hecha por equidad que el Gobierno quizo guardar al causante, es una verdadera transaccion, en la que como es bien sabido que para que sea obligatoria, es indispensable que intervenga la voluntad de ambos contratantes.

Por estas razones, y atendido á que al hacerse uso de la facultad coactiva contra las prescripciones de la ley que la concede, ya no puede estimarse como autoridad competente el Administrador de la Aduana marítima, y por consiguiente, de hecho se viola la garantía que reclama el quejoso, y con el fundamento del artículo 101 de la Constitucion general, fallo con las siguientes proposiciones:

1º La Justicia de la Union, ampara y protege á J. Gallick y Hermano, contra la providencia dictada por el C. Administrador de la Aduana marítima en uso de la facultad económico-coactiva, para exigirles la cantidad de seiscientos cinco pesos veintitres centavos, tercera parte de los derechos de importacion que causaron los efectos que á su consignacion trajo el vapor "Sacramento."

2ª, Síquense dos copias de esta sentencia, una para el Semanario Judicial y otra para publicarla en el periódico oficial del Estado, y notificada que sea esta sentencia, remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su revision.

El C. Juez de Distrito del Estado, definitivamente juzgando, así lo proveyó y firmó por ante mí. Doy fé,—*Pedro S. Bermúdez*.—*Francisco Medina*, secretario.

Es copia. Mazatlán, Marzo 25 de 1873
—*Francisco Medina*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia

México, Mayo 16 de 1873.—Visto el recurso de amparo que en 14 de Enero promovieron en Mazatlán, ante el Juez de Distrito de Sinaloa, los Sres J. Gallick y Hermano, contra el cobro que en uso de la facultad económico-coactiva les hace el Administrador de aquella Aduana Marítima, por la cantidad de (\$ 605.23) seiscientos cinco pesos veintitres centavos, como tercera parte de los derechos causados por las mercancías extranjeras que recibieron el 24 de Octubre de 1871, por el Vapor "Sacramento."—Visto el informe del Administrador; lo pedido por el fiscal; las pruebas rendidas y todas las demas constancias de autos; y Considerando.—1ª: Que los Señores J. Gallick y Hermano confiesan francamente, que son los importadores y dueños de las mercancías recibidas por el Vapor "Sacramento," cuyos derechos de importacion conforme al Arancel vigente, ascienden á la cantidad de (\$ 1815.69) mil ochocientos quince pesos sesenta y nueve centavos, y por consiguiente es legítimo, claro é incontestable el derecho con que el Administrador les exige el pago de una tercera parte.—2ª: Que esa legitimidad y claridad en el derecho con que la autoridad exige un pago, es todo lo que se requiere para el ejercicio de

la facultad económico-coactiva, segun el artículo 3º de la ley de 20 de Enero de 1837.

—3ª: Que las excepciones opuestas contra ese cobro, y que consisten: en el pago hecho por la fuerza á los revoltosos, y en el valor que deba tener la rebaja ofrecida por la autoridad, lejos de poner en duda, confirman el derecho del Gobierno, y por lo mismo, aun cuando ellas sean de estimarse en el juicio respectivo, no pueden estorbar el ejercicio de la facultad económico-coactiva hasta que la Hacienda pública se encuentre asegurada, conforme al artículo 18 de la ley de 1837, ya citada.—Por tales razones y fundamentos y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente:—Primero: Se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito del Estado de Sinaloa en el Puerto de Mazatlán á 24 de Febrero del corriente año, en la cual declara: «La Justicia de la Union ampara y protege á J. Gallick y Hermano, contra la providencia dictada por el C. Administrador de la Aduana Marítima en uso de la facultad económico-coactiva, para exigirles la cantidad de (\$ 605.23) seiscientos cinco pesos veintitres centavos, tercera parte de los derechos de importacion que causaron los efectos que á su consignacion trajo el Vapor "Sacramento."—Segundo: La Justicia de la Union no ampara ni protege á J. Gallick y Hermano contra el cobro que, ejercitando la facultad económico-coactiva, les hace el Administrador de la Aduana Marítima de Mazatlán, de la cantidad de (\$ 605.23) seiscientos cinco pesos veintitres centavos, tercera parte de los derechos de importacion que causaron los efectos que á su consignacion trajo el Vapor "Sacramento."—Devuélvase sus actuaciones al Juez de Distrito que las elevó en revision, acompañándolo testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los Señores Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte

Suprema de Justicia de los Estados- Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Pedro Ogasan.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 27 de Mayo de 1873.—*Lic Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el juzgado de Distrito de Zacatecas por Jesus Montañez, contra su consignacion al servicio de las armas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Al Juzgado de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que en cinco del corriente se presentó Jesus Montañez, vecino de la hacienda de Santa Rosa, jurisdiccion de Fresnillo, y actualmente soldado de la compañía de Zapadores del Batallon número 24 del Ejército nacional, exponiendo: que por D. Francisco Llaguno, Presidente, dueño y administrador de la hacienda de Santa Cruz, se pidieron dos hombres de Santa Rosa para cubrir el contingente de sangre del Estado, y que el Administrador del punto de su residencia, solo por que vivía arrimado, lo remitió como vago y pernicioso, lo que cree porque no era acomodado, y prueba con la carta de fojas 3; y que por lo expuesto, se viene en conocimiento, que el C. mexicano es protegido y garantizado por el Código fundamental de la Nacion, y por que se le deben impartir las garantías conforme á las leyes, pues en el presente caso ha sido infringido el artículo 5º del Código á que alude, y pide amparo y proteccion de la Justicia federal.

Pedido informe sobre lo principal al Presidente municipal de Santa Cruz para que informara con justificacion al tercero dia sobre su contenido, y lo evacuó con fecha 12 del presente manifestando, que Jesus Montañez fué remitido á la Jefatura del Partido con destino á cubrir las bajas del Ejército nacional, en cumplimiento de la asignacion que la dicha Jefatura hizo á la municipalidad, segun consta del oficio que original acompaña y obra á fojas 5: que la presidencia de su cargo tomó informes de los comisarios de los ranchos de la comprension, de los individuos que tuvieran los requisitos que recomienda el Gobierno del Estado, para destinarlos al servicio de las armas; y como se le aseguró por el de la hacienda de Santa Rosa que Jesus Montañez era vago, sin profesion ni oficio alguno honesto para vivir, fundado en otros informes, de que en el rancho de los Hernandez donde vivia Montañez la mayor parte de sus habitantes eran de mala nota, no tuvo inconveniente en disponer de él, conforme á lo dispuesto por el Gobierno del Estado en el oficio de fojas 4, relativo á que teniendo que cumplir con lo prevenido en la ley de 28 de Mayo de 1869, y su reglamento de 10 de Junio siguiente en que se asignó á los Estados el contingente de sangre del uno al millar sobre su poblacion para cubrir las bajas del ejército, y teniendo presente el censo estadístico últimamente practicado en 1868, corresponden al Partido de Fresnillo 55 remplazos, que remitiría al Gobierno dentro de cuarenta dias del recibo de la circular, haciendo la distribucion entre las municipalidades del Partido, pudiendo disponer de aquellos hombres que menos se perjudiquen y sean de mala conducta, como vagos, tahures &c, y lo trascribo al Presidente de Santa Cruz, para que remitiera cinco remplazos asignados á la municipalidad.

Por lo expuesto, el Promotor fiscal entiende, que el quejoso no está comprendido en el artículo 5º de la Constitucion gene-